



RESOLUCIÓN No. CSJBOR21-98
05/02/2021

“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No.: 13001-11-01-001-2021-00010-00

Solicitante: Nancy Patricia Barrios Pérez

Despacho: Juzgado 7° Laboral del Circuito de Cartagena

Funcionario judicial: Lina María Hoyos Hormechea

Clase de proceso: Ordinario laboral

Número de radicación del proceso: 2016-00581

Magistrada ponente: Patricia Rocío Ceballos Rodríguez

Fecha de sesión: 3 de febrero de 2020.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de vigilancia judicial administrativa

La doctora Nancy Patricia Barrios Pérez, en calidad de apoderada judicial del demandante dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2016-00581, que cursa ante el Juzgado 7° Laboral del Circuito de Cartagena, solicita se inicie el trámite de vigilancia judicial administrativa, dado que, según lo afirma, en el mes de julio de 2020 presentó solicitud de relevo del curador ad litem nombrado, sin que a la fecha el despacho judicial haya proveído al respecto.

2. Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Mediante auto CSJBOAVJ21-43 de 22 de enero de 2021, se solicitó informe a la doctora Bertha María Herrera de Ávila, Jueza Promiscua de Familia de Simití, como a la secretaria de esa agencia judicial, otorgando para ello el término de tres días contados a partir del día siguiente a la comunicación del referido auto, actuación surtida el día 25 de enero del corriente año.

3. Informes de verificación

Dentro de la oportunidad para ello a la doctora Lina María Hoyos Hormechea, Jueza 7° Laboral del Circuito de Cartagena, rindió el informe solicitado, afirmó bajo la gravedad de juramento (artículo 5° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011) que el expediente ingresó al despacho el día 28 de enero de 2021 con nota secretarial que daba cuenta que la solicitud aludida por la aquí quejosa fue presentada con destino al proceso 2016-00591 en el cual fungen como partes personas distintas a las reseñadas en la solicitud de relevo de curador ad litem promovida, por lo que al no coincidir las partes, no fue posible para la secretaria ubicar el destinatario del memorial hasta tanto se tuvo conocimiento del presente trámite administrativo, por lo que se profirió auto de la misma fecha.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la doctora Nancy Patricia Barrios Pérez, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachados judiciales de ésta circunscripción territorial.

2. Problema administrativo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, esta corporación debe resolver si existe mérito para disponer la apertura del trámite de vigilancia judicial administrativa o, si por el contrario, lo procedente es resolver de fondo la presente solicitud, para lo cual abordará primero los temas relacionados a continuación.

3. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe “*para que la justicia se administre oportuna y eficazmente*” y que “*es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias*”, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: “*Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones*”. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma cómo un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la sala disciplinaria seccional.

4. Apertura de la vigilancia judicial administrativa

Sobre la apertura dentro del trámite de la vigilancia judicial administrativa, el artículo 6° del Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, señala que cuando el consejo seccional *“encontrare mérito, dispondrá la apertura del trámite de vigilancia judicial, mediante auto motivado, en el que señalará en forma clara los hechos que dieron lugar al trámite, con la argumentación jurídica que origina la apertura; con la indicación concreta las medidas a tomar, -cuando a ello haya lugar-, que habrá de realizar el servidor judicial requerido para normalizar la situación de deficiencia de la administración de justicia; así mismo dispondrá que éste presente las explicaciones, justificaciones, informes, documentos y pruebas que pretenda hacer valer, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la apertura”*.

5. Caso concreto

La doctora Nancy Patricia Barrios Pérez, en calidad de apoderada judicial del demandante dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2016-00581, que cursa ante el Juzgado 7° Laboral del Circuito de Cartagena, solicita se inicie el trámite de vigilancia judicial administrativa, dado que, según lo afirma, en el mes de julio de 2020 presentó solicitud de relevo del curador ad litem nombrado, sin que a la fecha el despacho judicial haya proveído al respecto.

Mediante auto CSJBOAVJ21-43 de 22 de enero de 2021, se solicitó informe a la doctora Bertha María Herrera de Ávila, Jueza Promiscua de Familia de Simití, como a la secretaria de esa agencia judicial, otorgando para ello el término de tres días contados a partir del día siguiente a la comunicación del referido auto, actuación surtida el día 25 de enero del corriente año.

Dentro de la oportunidad para ello a la doctora Lina María Hoyos Hormechea, Jueza 7° Laboral del Circuito de Cartagena, rindió el informe solicitado, afirmó bajo la gravedad de juramento (artículo 5° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011) que el expediente ingresó al despacho el día 28 de enero de 2021 con nota secretarial que daba cuenta que la solicitud aludida por la aquí quejosa fue presentada con destino al proceso 2016-00591 en el cual fungen como partes personas distintas a las reseñadas en la solicitud de relevo de curador ad litem promovida, por lo que al no coincidir las partes, no fue posible para la secretaria ubicar el destinatario del memorial hasta tanto se tuvo conocimiento del presente trámite administrativo, por lo que se profirió auto de la misma fecha.

De acuerdo a lo expuesto en la solicitud de vigilancia, del informe rendido bajo la gravedad de juramento por la funcionaria judicial y de las pruebas obrantes en el plenario, esta corporación encuentra demostrado lo siguiente:

No.	ACTUACIÓN	FECHA
1	Solicitud de relevo de curado ad litem presentada con destino al proceso 2016-00391	7/07/2020
2	Requerimiento efectuado por la seccional dentro de la vigilancia judicial	25/01/2021
3	Pase al despacho	28/01/2021
4	Auto resuelve solicitud	28/01/2021
5	Notificación auto	29/01/2021

Descendiendo al caso concreto se tiene que, el objeto de la presente vigilancia judicial administrativa se ciñe en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 7° Laboral del Circuito de Cartagena en resolver la solicitud de relevo de curador ad litem presentada por la parte demandante.

En ese sentido, se tiene que la mentada solicitud de relevo ingresó al despacho para su resolución el día 28 de enero de 2021 y fue atendida a través de proveído de la misma fecha, esto es luego de transcurridos 123 días desde su presentación y con ocasión al requerimiento efectuado por la seccional el día 25 de enero del corriente año, término que supera la tarifa señalada en el artículo 109 del Código General del Proceso, conforme al cual corresponde al secretario ingresar los memoriales al expediente inmediatamente y efectuar el pase al despacho a efectos de que el juez provea lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia SU-333 de 2020 en la cual destacó que (...) *“el respeto a los términos procesales debe ser perentorio y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales, **por lo que el incumplimiento injustificado acarrea sanciones disciplinarias.**”* (Subrayas y negrillas nuestras).

Igualmente, señaló la Corporación que para determinar la configuración de dilaciones injustificadas al interior de los procesos judiciales es necesario examinar si la mora atribuida a los servidores judiciales: *“(i) es fruto de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.”*

De esa manera, observa la seccional que si bien en el *sub examine*, la secretaría incumplió el término legal para efectuar el pase al despacho del expediente, no puede pasar por alto la corporación el argumento planteado por funcionario judicial, conforme al cual la demora en el trámite del proceso de marras obedeció al error en que incurrió la aquí quejosa al momento de dirigir el memorial, pues referenció un número de radicado distinto al que corresponde al proceso de marras, lo que impidió a la secretaría hallar el expediente con destino al cual se encontraba dirigido, error que a juicio de esta corporación no puede ser atribuible al despacho judicial encartado, teniendo en cuenta las circunstancias actuales en que se presta el servicio de administración de justicia, esto es forma virtual y remota, lo que implica que los usuarios promuevan las solicitudes a través del correo institucional de cada despacho judicial, por lo que los datos que consignen en los mismos comportan parte fundamental para que las secretarías puedan identificar e ingresar los memoriales al expediente respectivo y efectúen el pase al despacho, por lo que en situaciones como la que presente, el descuido de las partes al consignar los datos y proporcionar la información correcta en los memoriales se convierte en un obstáculo para cumplir cabalmente la obligación de efectuar el pase al despacho del expediente en la forma establecida en el

artículo 109 del Código General del Proceso, máxime cuando en el *sub lite* correspondía a una solicitud presentada en el marco de las medidas de trabajo preferente en casa de los servidores judiciales.

Corolario de lo anterior, si bien el pase al despacho no fue efectuado dentro del término señalado en el artículo 109 del Código General del Proceso, no puede pasar por alto esta seccional, que ello obedeció a un error atribuible directamente a la peticionaria, situación que, como se reseñó en líneas precedentes, eximen de responsabilidad.

Por tanto, no encuentra esta corporación razón para endilgarle responsabilidad a los servidores judiciales, pues no se evidencia una situación de deficiencia injustificada que deba ser normalizada a través de la vigilancia judicial administrativa, razón por la que se dispondrá el archivo de este trámite.

6. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, esta seccional no encuentra razón para endilgarle responsabilidad a los servidores judiciales requeridos, pues no se evidencia una situación de deficiencia injustificada que deba ser normalizada a través de la vigilancia judicial administrativa, por lo que se dispondrá el archivo de este trámite.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

7. RESUELVE

PRIMERO: Archivar la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida la doctora Nancy Patricia Barrios Pérez, dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2016-00581, que cursa ante el Juzgado 7° Laboral del Circuito de Cartagena, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a los involucrados en el trámite administrativo.

TERCERO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



IVÁN EDUARDO LATORRE GAMBOA
Presidente

Resolución Hoja No. 6
Resolución No. CSJBOR21-98
5 de febrero de 2021

M.P. PRCR

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.
Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co
Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cartagena – Bolívar. Colombia